



JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENTE:

D. Mario Andrés Urrea Mallebrera, Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.

VOCALES:

Representantes de la Administración del Estado

D. Ramón Aragón Rueda, Jefe de la Unidad del IGME en Murcia. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

D. Guillermo Ortiz Figueroa, Director del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Murcia. Ministerio para la Transición Ecológica.

Representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

D. Francisco Selva Sevilla, Jefe de Servicio de la Agencia del Agua en Albacete, por delegación de D. José Manuel Martín Aparicio, Director Gerente de la Agencia del Agua, y de D. José Juan Fernández Zarco, Director General de Desarrollo Rural.

Representantes de la Generalitat Valenciana

D. José Vicente Benadero García-Morato, Subdirector General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, por delegación de D^a Mireia Mollà Herrera, Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, y de D. Arcadi España García, Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

Representantes de la Junta de Andalucía

D. Sergio Arjona Jiménez, Director General de Infraestructuras del Agua.

En Murcia, siendo las doce horas y veinte minutos del día **doce de diciembre de dos mil diecinueve**, se reúne la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. en la Sala La Pedrera de la sede central del Organismo, sita en Plaza Fontes, número 1, asistiendo los Señores/as reseñados al margen.

El Sr. Presidente da la bienvenida a los asistentes y en especial, a los nuevos miembros que se incorporan a esta Junta de Gobierno como consecuencia de los últimos cambios producidos en algunos cargos de las administraciones autonómicas como las de Murcia y Castilla-La Mancha, mostrando su agradecimiento a los miembros que han cesado.

Por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a:

D. José Manuel Martín Aparicio, Director-Gerente de la Agencia del Agua, en sustitución de D. Antonio Luengo Rodríguez.

D. José Juan Fernández Zarco, Director General de Desarrollo Rural, en sustitución de D. José Manuel Martín Aparicio.

Por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a:

D. Antonio Luengo Zapata, Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, en sustitución de D. Miguel Ángel del Amor Saavedra.

D. Víctor Martínez Muñoz, Secretario General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

D. Jaime Pérez Zulueta, Director General de Ordenación del Territorio y Arquitectura de la Consejería de Fomento e Infraestructuras.

D. Francisco Marín Arnaldos, Director General de Medio Ambiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

D^a Miriam Pérez Albaladejo, Directora General del Mar Menor de la Consejería de Agua,





Representantes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

D. Antonio Luengo Zapata, Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

D. Víctor Martínez Muñoz, Secretario General de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por sí y por delegación de D^a Miriam Pérez Albaladejo, Directora General del Mar Menor.

D. Jaime Pérez Zulueta, Director General de Territorio y Arquitectura.

D. Sebastián Delgado Amaro, Director General del Agua, por delegación de D. Francisco Marín Arnaldos, Director General de Medio Ambiente.

D. Ignacio Díaz Rodríguez-Valdés, Gerente de ESAMUR.

Representantes de usos de regadíos

D. Lucas Jiménez Vidal, del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, por sí y por delegación de D. Juan Marín Bravo, de la Comunidad de Regantes de Lorca.

D. Isidoro Ruíz Gabaldón, de la Junta Central de Usuarios Norte vega Río Segura, por sí y por delegación de D. Diego Frutos Saura, de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia.

D. Pedro Mompeán Madrid, del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela.

D. Manuel Martínez Madrid, de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

D^a Belén Castellano Garrido, como suplente de

D. Javier Berenguer Coves, de la Comunidad de Regantes El Canal.

Representantes de usos energéticos

D. Javier López Nieto, de Iberdrola Generación, S.A.U.

Representantes de abastecimientos

D^a Francisca Baraza Martínez, Delegada en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

D. Marco Antonio Fernández Esteban, Concejal de Pedanías y Barrios, por delegación de D. José Ballesta Germán.

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. *D. Ignacio Díaz Rodríguez-Valdés*, Gerente de ESAMUR, perteneciente a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, en sustitución de D. Joaquín Ruíz Montalván.

A continuación, cede la palabra a D^a Mónica Gonzalo Martínez, Secretaria General del Organismo, que indica que ha excusado asistencia D^a Teresa Royo-Villanova Navasqües, representante del Ministerio de Economía y Empresa, y da lectura de las delegaciones de voto recibidas reseñadas al margen, indicando que en el Presidente de la Junta de Gobierno han delegado los siguientes miembros:

D. Carlos Moreno Fernández, representante del Ministerio para la Transición Ecológica.

D^a María Fernández Sanz, representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

D. Pablo Bartolomé Lara Lara, representante del Ministerio de Defensa.

D. Juan Lorente García, representante del Ministerio del Interior.

D^a Covadonga Caballo Diéguez, representante del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

La Secretaria General, a la vista de las delegaciones comunicadas y a efectos de votación, además del voto propio, constata que:

El Sr. Presidente tiene 5 votos delegados.

D. Lucas Jiménez Vidal tiene 1 voto delegado.

D. Francisco Selva Sevilla tiene 1 voto delegado.

D. José Vicente Benadero García-Morato tiene 1 voto delegado.

D. Isidoro Ruíz Gabaldón tiene 1 voto delegado.

D. Víctor Martínez Muñoz tiene 1 voto delegado.

Una vez verificada la existencia de quórum, el Sr. Presidente comienza con el **punto uno** del orden del día "**Aprobación del acta de la sesión anterior de 24/07/2019**".

El Sr. Presidente pregunta a los asistentes si hay alguna observación al acta y no habiendo ninguna, se declara **aprobada**.



Invitados

D. Julio Zapata Conesa, de la SAT Los Dones.
D. Carlos Conradi Monner, Director de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
D. Carlos Germán Escudero, de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante, Margen Derecha.
D. Angel Luis Larrosa, del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela.

Representantes del Organismo

D. Carlos Marco García, Director Técnico.
D. Javier García Garay, Comisario de Aguas, acompañado de *D. Adolfo Mérida Abril*, Comisario Adjunto.
D. Jesús García Martínez, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica.

SECRETARIA

D^a Mónica Gonzalo Martínez, Secretaria General.

A continuación, el Sr. Presidente da paso al **punto dos** del orden del día **“Informe de la Secretaría General sobre ejecución del Presupuesto de 2019 a 30 de noviembre de 2019”** y cede la palabra a D^a Mónica Gonzalo, Secretaria General, quien recuerda que se sigue trabajando con el Presupuesto de 2018 prorrogado en diciembre del mismo año por el Consejo de Ministros, e informa que el grado de ejecución es del 74,52%, correspondiendo el 55,94% al capítulo de inversiones y el 92,19% a gastos corrientes entre los que se incluyen la reposición de infraestructuras, encomiendas de gestión con medios propios y 2M€ de obras de emergencia como consecuencia de los daños ocasionados por la DANA de septiembre pasado.

Explica que en el capítulo 6, además de la contratación ordinaria del Organismo, se han incluido 10 M€ para la contratación de las obras de emergencia relativas a la DANA ya mencionada, indicando que se ha iniciado un procedimiento de modificación presupuestaria con el objetivo de incrementar el capítulo 2, cercano a los 7 M€, y el capítulo 6 cercano a los 40 M€, para atender el pago de dichas obras.

En cuanto a los ingresos, informa que en el año 2018 se ha recaudado en concepto de canon de regulación aproximadamente 1,5 M€. Asimismo, y haciendo alusión al déficit presupuestario del cual se informó en la pasada Junta de 3 de mayo, derivado del impago por parte del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (en adelante SCRATS) de la tarifa binomia, informa que la situación quedó regularizada el pasado 13 de mayo con el ingreso de cerca de 25,5 M€ que incluían el principal más los intereses de demora.

Asociado a la ejecución del Presupuesto, la Sra. Gonzalo informa que existe un déficit estructural en el Organismo al contar con un 15% de vacantes de personal funcionario y un 30% de vacantes de personal laboral. Indica que desde 2014 se está tratando de hacer frente a esta escasez de medios humanos, iniciándose un Plan de Choque en 2018 que ha culminado con una petición formal a nuestro Ministerio el pasado 28 de noviembre para efectuar una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, ya que es totalmente necesario reforzar la Comisaría de Aguas, entre otros motivos, por el tema del Mar Menor, así como para Dirección Técnica debido a la existencia de nuevas infraestructuras como las desaladoras.

Asimismo indica que tras la DANA sufrida en el mes de septiembre, se ha puesto de manifiesto la necesidad de acercar la Administración a los ciudadanos, por lo que los Ayuntamientos de Hellín, Pulpí y Orihuela, han cedido locales para que los guardas fluviales y los agentes medioambientales puedan atender a aquéllos ciudadanos que así lo necesiten.



Por último, la Secretaria General informa en cumplimiento del artículo 166 de la Ley General Presupuestaria, que en el BOE de 17 de septiembre pasado ha sido publicada la Resolución de 3 de septiembre de 2019 por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 del Organismo y el informe de auditoría.

Tras la exposición del punto dos, D. Antonio Luengo, Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, manifiesta que les llama la atención que en capítulo 6 de inversiones reales, a fecha 29 de noviembre esté ejecutado el 55,49% de lo presupuestado y considera que se podrían haber efectuado obras de infraestructuras para la consecución del vertido 0 encaminadas a evitar la degradación del Mar Menor. En cuanto a las obras de emergencia, solicita que se valore la declaración de emergencia de ciertas actuaciones que son fundamentales como la bajada de nivel del acuífero y evitar que entre agua por la rambla al Mar Menor, a fin de que el Ministerio habilite al Organismo de cuenca llevar a cabo las mismas.

Sobre la primera cuestión, la Secretaria General informa que al estar trabajando con un presupuesto prorrogado, contamos con una limitación del 50% en base al Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2018, por lo que el porcentaje se ha rebasado. En cuanto a la segunda cuestión, el Sr. Presidente aclara que la declaración de emergencia efectuada por el Organismo ha sido en relación con la DANA para poder restablecer en el menor tiempo posible el dominio público hidráulico, ya que existía riesgo en muchos casos, sobre bienes y personas, y siempre al amparo del Real Decreto Ley que limita la parte ambiental respecto al procedimiento ordinario. Sobre la declaración de emergencia de las obras sobre vertido 0, indica que dicha declaración no exime de la declaración de impacto ambiental, por lo que se está iniciando la tramitación ambiental para poder acometer las actuaciones correspondientes de acuerdo con expuesto por el Secretario de Estado, ya que en caso de eximir del trámite reglado es necesario ponerlo en conocimiento de la Unión Europea según las directivas, procedimiento este más complicado que si se procede a través del trámite ordinario; no obstante indica que volverá a reiterar al Ministerio la petición de la Comunidad Autónoma aclarando que no se trata de obras de la Confederación sino del Ministerio.

Seguidamente, el Sr. Presidente da paso al **punto tres** del orden del día **“Informe de la Dirección Técnica”** y cede la palabra a D. Carlos Marco, Director Técnico, quien expone la situación del año hidrológico, indicando que la precipitación media areal en dicho periodo ha sido de 445,6 l/m² que incluye fuertes episodios de lluvias como la DANA de septiembre, lo que representa una de las mayores cifras registradas en los últimos diez años.

Sobre la citada DANA sufrida del 12 al 15 de septiembre, informa que la mayoría de las precipitaciones cayeron sobre la ciudad de Orihuela, indicando que las mediciones se llevaron a cabo a través del Servicio Automático de Información Hidrológica (SAIH), el cual empezó a funcionar con fondos propios a partir del 1 de septiembre. Explica que mediante una serie de maniobras como fue el cierre de presas, se consiguió una bajada inmediata del nivel del río y evitó que se desperdiciara una sola gota destinada a reservas.

Asimismo el Sr. Marco indica que se produjeron dos trombas de avenidas, lo que llevó consigo la declaración extraordinaria del escenario 1 en la presa del Azud de Ojós para evitar que el agua se vertiera por encima de la presa al faltar solo 8 cm para que ocurriera, así como en la presa de Santomera, la cual llegó a alcanzar caudales de 700 m³/s, recordando las avenidas de 1906 y 1947 en las que los caudales fueron bastante inferiores y se produjeron 31 y 11 muertos respectivamente. Con arreglo al plan de emergencia de la presa, indica que se limpió los desagües de superficie como parte de las aportaciones al río que provienen del río Santomera.



Como resultado de los daños sufridos por este episodio de lluvias en diversas infraestructuras del Organismo, destaca los producidos por la rotura en el canal de la margen izquierda a la altura de Los Valientes.

En cuanto a las aportaciones del año hidrológico que acaba de concluir, el Sr. Marco indica que, pese a que la pluviometría ha sido importante, no ha sido un buen año ya que los valores alcanzan los $21,95 \text{ hm}^3$, que comparados con los del año anterior, arroja un déficit de unos 60 hm^3 . En relación con los consumos, indica que estos han sido de $343,37 \text{ hm}^3$, lo que representa un valor similar al año anterior aunque el desvío con respecto al objetivo marcado ha sido de unos 40 hm^3 . En cuanto a las existencias de recursos propios, informa que hemos concluido el año con 109 hm^3 con un desvío sobre el objetivo marcado de $11,23 \text{ Hm}^3$, por lo que el nuevo año hidrológico se presenta peor que el anterior. Asimismo indica que en la última Comisión de Desembalse, el principal objetivo fijado ha sido el mantener igualmente 300 hm^3 a fin de año. En relación con las existencias del trasvase Tajo-Segura, indica que a fecha 1 de octubre son $54,22 \text{ hm}^3$.

Con respecto a las principales inversiones de la Dirección Técnica, el Sr. Marco informa que entre las mismas se encuentran las obras de emergencia derivadas de los daños ocasionados por la DANA de septiembre que ascienden a $18.530.000 \text{ €}$ distribuidos tal y como queda reflejado en la documentación distribuida entre los miembros de la Junta. Asimismo quedan encuadradas en este apartado las obras de defensa con fondos propios del Organismo y el estudio de las presas de Nogalte, Béjar y La Torrecilla, a lo que se ha añadido el del encauzamiento de la rambla de Viznaga. En cuanto a las inversiones de la Dirección General de Obras Hidráulicas que ascienden a más de 12 M€ , además de la interconexión de las desaladoras, se encuentra en estudio la licitación del SAIH, así como la ampliación de la EDAR de Murcia Este, a lo que también se ha añadido la conexión de las pedanías Isso con la EDAR de Hellín.

Por último, el Director Técnico indica que con fondos propios se está realizando la reparación de la impulsión de Fuente Álamo, así como la entrega de la recuperación de la desaladora de Torrevieja al trasvase Tajo-Segura, ascendiendo en conjunto a unos $4,5 \text{ M€}$. Igualmente informa que existen unas pequeñas inversiones que responden al compromiso adquirido en Junta de Gobierno sobre el estudio técnico-económico de la tabla de equivalencia del canon de regulación, así como una vieja reivindicación de los regantes de Hellín sobre un cruce que generaba muchos problemas.

El Sr. Presidente manifiesta que existe un esfuerzo importante centrado actualmente en las obras de emergencia aunque también se está continuando con las actuaciones ordinarias necesarias para el funcionamiento del Organismo de cuenca y que ya empiezan a dar su fruto, al contar ya con proyectos que se encontraban pendientes desde hacía tiempo y que van a ser licitados en un plazo corto de tiempo.

A continuación, el Sr. Presidente da inicio al **punto cuatro** del orden del día **“Informe de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre el cierre del año hidrológico 2018-2019”**, cediendo la palabra a D^a Francisca Baraza, Presidenta de la citada Mancomunidad, quien hace alusión a la documentación de que disponen los miembros sobre dicho punto, en donde figuran los consumos sobre los recursos gestionados por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (en adelante MCT) para garantizar el abastecimiento a los 80 municipios que conforman dicho Organismo, siendo el total de estos consumos 196 hm^3 con la siguiente distribución: 48 hm^3 derivados del río Taibilla, 86 hm^3 procedentes de aguas del trasvase Tajo-Segura, $1,2 \text{ hm}^3$ procedentes de recursos extraordinario, y 61 hm^3 procedentes de aguas desaladas que incluyen tanto las desaladoras propias de la MCT como las de Acuamed.

U
D
U





La Sra. Baraza indica que el citado total de consumo se mantiene en la línea de años anteriores aunque en la actualidad existe una tendencia a la baja ya que a estas fechas se dispone de menos recursos que el año anterior, debiendo compensar esa carencia con otras fuentes, por lo que se hace fundamental trabajar con ese mix de recursos de las procedencias mencionadas. Indica que en el periodo referido, al encontrarse el trasvase en el nivel 3, la gestión de este recurso ha sido menos complicada que en años anteriores.

El Sr. Presidente manifiesta la tranquilidad que ofrece el tener el abastecimiento garantizado incluso en el año hidrológico en curso, y da paso al **punto cinco** del orden del día **“Informe de la Oficina de Planificación Hidrológica”**. Toma la palabra D. Jesús García, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, quien partiendo de los datos expuestos por el Director Técnico hace una reflexión en relación con los valores que aportan los indicadores de sequía. Recuerda que estamos sometidos a un sistema de doble indicador que incluye uno sobre pluviometría para la caracterización de la sequía y otro para la caracterización de la escasez coyuntural en base a un análisis de las aportaciones a los embalses y existencias en los mismos.

El Sr. García explica que las precipitaciones de 450 l/m^2 del último año, suponen un incremento importante en relación con la lluvia que cae en la cuenca del Segura en año medio, que es del orden de los 360 l/m^2 . Partiendo de esa situación pluviométrica, indica que las cuatro unidades territoriales definidas en el Plan de Sequía se encuentran con indicadores por encima del valor medio que es de 0,5, y hace constar especialmente la situación que se observa en las unidades territoriales de la margen izquierda del río Segura y Mundo y sobre todo en la zona principal, en las que se han producido niveles de lluvia realmente altos.

Indica que ninguno de los indicadores da situación de sequía prolongada, ya que todos ellos están por encima del valor de 0,3. En estas condiciones, cuando analizamos los datos de escasez nos esperaríamos una situación de normalidad partiendo de esa pluviometría, pero comenta que eso no es así, ya que el subsistema cuenca se encuentra en prealerta y el subsistema trasvase en emergencia.

En relación con el subsistema cuenca, explica que las lluvias del mes de septiembre han cambiado la tendencia, pasando de ser negativa a positiva, aunque en ningún momento se alcance la situación de normalidad. Menciona que eso obedece a que se parte de unos bajos niveles de embalse y que mucha de la lluvia caída no ha sido útil al haberse producido en la parte baja de la cuenca y por lo tanto ha generado unas escorrentías que han ido directamente al mar, sin producir aportaciones a los embalses.

En cuanto al subsistema trasvase, informa que su situación es sensiblemente peor que la del subsistema cuenca ya que las lluvias en el Segura no se han producido con la misma intensidad que en la cabecera del Tajo y aunque en los dos últimos meses también hay una cierta mejora, no se observa la recuperación experimentada en el subsistema cuenca.

Como resultado de la situación de emergencia del subsistema trasvase y de prealerta del subsistema cuenca, el indicador global de la cuenca indica una situación de prealerta, mostrando la disparidad entre ambos subsistemas ya percibida en el inicio de la sequía de 2014-2015.

El Sr. García explica que con los datos puestos de manifiesto la situación no es de sequía extraordinaria, si bien no descarta que eso pueda producirse en un futuro próximo ya que el indicador del Tajo está muy cercano al umbral del 0,30.

En relación con la sequía a nivel nacional, continúa explicando que el mapa del conjunto de demarcaciones de España que ha sido distribuido muestra que está afectando a la parte oeste de la



península mientras que la parte este está en una mejor situación, similar a la que nos encontramos en el Segura. Destaca que a pesar de que cada cuenca trabaja con indicadores diferentes, se observa que los datos son bastante homogéneos entre sí.

En referencia a la escasez coyuntural a nivel nacional indica que la situación es más variopinta ya que está influenciada por la capacidad de, con los recursos disponibles, atender las demandas de cada zona.

Menciona que en la última Junta de Gobierno celebrada el pasado mes de julio en la que se analizó la prórroga del decreto de sequía, se realizaron una serie de previsiones con arreglo al comportamiento de la cuenca en ambos subsistemas.

El Sr. García indica que el episodio puntual de lluvias extremas producido en el subsistema cuenca en el mes de septiembre ha alterado una tendencia que hasta ese momento era claramente a la baja y que ha pasado al alza. De esto se deduce que aunque el comportamiento se ha ajustado a las previsiones que se manejaban hasta el 15 de septiembre, la mejora experimentada por dichas lluvias evitaron que el sistema entrase en situación de emergencia y por tanto de sequía extraordinaria.

El Sr. Presidente destaca sobre lo expuesto por el Sr. García, lo relativo a las previsiones efectuadas en su día para tramitar el decreto de sequía y recuerda que el Organismo cumplirá estrictamente lo que señala el Plan Especial de Sequía, y en el momento en que el indicador alcance los valores de sequía extraordinaria, se declararía esta situación reivindicando al Gobierno de la Nación la promulgación del decreto de sequía.

Interviene el Sr. Luengo de la Región de Murcia quien estando de acuerdo con el Sr. Presidente, considera que una vez analizado el informe de la Oficina de Planificación Hidrológica que muestra la coincidencia de las previsiones efectuadas con la realidad, salvando el episodio del 12 al 15 de septiembre, y teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran las cuencas del Tajo y del Segura, que puede derivar en situación de sequía extraordinaria, propone que se vaya elaborando los informes preceptivos así como la información pública oportuna para que el decreto de sequía se tramite a la mayor brevedad posible en caso de entrar en dicha situación y evitar así retrasos y ser lo más ágiles posible en cuanto al cumplimiento de la normativa de cara a solicitar el decreto de sequía.

Sobre esta propuesta, el Sr. Presidente indica que toma nota y que se elaborarán los informes que contengan el fiel reflejo de la situación de la cuenca, siendo muy vigilantes de la pluviometría para que en el momento que las aportaciones no sean las suficientes y nos lleven a un escenario preocupante, poder iniciar el procedimiento correspondiente.

Seguidamente, el Sr. Presidente da paso al **punto seis** del orden del día "**Informe de la Comisaría de Aguas**", cediendo la palabra a D. Javier García, Comisario de Aguas, quien, sobre la documentación enviada a los miembros destaca diversos datos. En cuanto al estado químico de las masas de agua superficiales, informa que de las 97 con las que cuenta la cuenca, 77 están en buen estado, 5 no alcanzan el buen estado y 15 están sin valorar. En lo relativo al estado ecológico reseña la buena situación de los embalses y destaca que nuestra demarcación hidrográfica cuenta con una red SAICA que cuenta con 7 estaciones que miden continuamente los parámetros de PH, conductividad, temperatura, oxígeno disuelto, turbidez, amonio, coeficiente de absorción espectral (SAC), nitratos y fosfatos, encontrándose 6 de ellas en el río Segura y la otra en el río Mundo, apreciando según los datos que una vez que el agua baja de Archena aumenta la conductividad y la temperatura. En cuanto al control del boro en el embalse de La Pedrera informa que el agua desalada de Torre Vieja que se





almacena en el embalse no llega nunca al 0,3 mg/l, sin embargo la planta desaladora está produciendo a 0,5 mg/l.

Con respecto a las masas de agua subterráneas informa que 39 se encuentran en buen estado químico y 24 en mal estado químico. En cuanto a los vertidos indica que hay censados unos 1.100, destacando que se han realizado 89 muestreos especiales y 88 ordinarios, lo que ha dado lugar a 42 propuestas de sanciones derivadas del Plan de Control de Vertidos.

En relación con las medidas adoptadas al amparo del Real Decreto 356/2015 prorrogado en septiembre de 2018, indica que una de esas medidas es la explotación de sondeos, siendo el volumen extraído de El Moresno y Los Losares de 5,37 hm³ respecto a los 8 hm³ que tenían autorizados. Sobre los sondeos de Alguazas I, II y III destinados a abastecimiento, la extracción ha sido de 1,88 hm³ sobre los 4,25 hm³ autorizados.

El Comisario de Aguas indica que se ha producido una omisión en la documentación enviada sobre los datos de los pozos de sequía que explota directamente la Confederación, por lo que al respecto informa que los sondeos de Hellín no se han puesto en explotación y que en la Vega Media se han extraído 3,8 hm³ vertidos al río, 1,4 hm³ vertidos a acequias, y en la Vega Baja han sido 0,9 hm³ vertidos al río. En cuanto a los pozos del Sinclinal de Calasparra, indica que se han extraído 7,41 hm³.

Respecto a las desaladoras, indica que existen 3 con autorizaciones temporales al amparo del decreto de sequía como son las de Valdelentisco con una producción de 23,65 hm³ para riego, 1,64 hm³ para uso industrial y 5,29 hm³ para MCT, Torrevieja que ha producido 66,5 hm³ para el SCRATS y 0,16 hm³ para la MCT, y la de Escombreras con un volumen de autorización provisional de 22,8 hm³ siendo el volumen producido en el año hidrológico 2018-2019 de 17,7 hm³. En cuanto a la desaladora de Águilas que cuenta con concesiones definitivas, la producción ha sido de 54,87 hm³, de los cuales 2,07 hm³ se han destinado a la MCT y el resto para riego.

Sobre las desaladoras gestionadas por Acuamed destaca que en el año hidrológico que acaba de concluir la producción es de 152 hm³ y desde el año de partida 2007-2008 el total producido ha sido de 702 hm³, siendo la de Águilas la que más ha producido. Asimismo indica que existe un error al respecto en la documentación enviada, ya que en el cuadro de la página 32, los valores correspondientes a la columna de "Torrevieja" corresponden en realidad a los de "Valdelentisco" y viceversa.

En cuanto a las cesiones de derechos, el Comisario de Aguas informa que se han tramitado 38 peticiones por un volumen de 15,7 hm³, habiendo sido autorizados 8,6 hm³. Sobre el regadío consolidado informa que en el último año hidrológico se han solicitado 192 peticiones de regularización. Asimismo destaca las 8 solicitudes de concesiones para regadío social por un total de 15,17 hm³ en Castilla-La Mancha, en base al artículo 15 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura por la que establece la asignación de 10 hm³/año en la zona de Albacete para este regadío, lo que supone haber sido declarados de interés por la comunidad autónoma cuando la superficie es menor de 1.000 ha, a fin de vertebrar el territorio. Igualmente indica que se encuentran en tramitación 2 solicitudes de concesión de las aguas infiltradas del Trasvase Tajo-Segura en el túnel del Talave.

Respecto al estado cuantitativo de las masas de agua subterránea y la piezometría, el Comisario de Aguas comenta que la red oficial de la Demarcación cuenta con 178 piezómetros que controlan 64 acuíferos, e indica que derivado de dicho control, 60 de ellos se encuentran en buen estado, 76 en mal



estado y 42 en una posición intermedia, por lo que se constata que hay un predominio de sondeos en situación de aguas bajas en las masas de agua en mal estado cuantitativo. Asimismo informa que existen tres tipos de tendencia en los piezómetros: los que mantienen una tendencia piezométrica de descenso bien definida como El Boquerón, los que su tendencia se ha atenuado y que están situados en el centro como el de Tobarra-Tedera-Pinilla, y por último los que se encuentran en equilibrio como el de Alto Guadalentín. En cuanto a la piezometría de los pozos de sequía de la Vega Media, Baja y el Sinclinal de Calasparra, indica que ha tenido una evolución favorable puesto que cumple las previsiones de la declaración de impacto ambiental con unos parámetros establecidos muy estrictos.

En cuanto al Plan de Comisaría de Aguas de inspección y control de aprovechamientos sin derecho aparente, recuerda que en octubre de 2018 se inició el plan de choque para la detección de superficies sin derecho aparente de riego en base al cruce de datos entre la teledetección con el registro de aguas. Indica que a 30 de abril de 2019 se habían efectuado en la cuenca 816 inspecciones de comprobación con una superficie detectada inicialmente como sin derecho aparente de riego de 3.622 ha para, en su caso, denunciarlas. Dentro de este apartado y referido al Mar Menor, indica que en 2019 se han iniciado 141 expedientes sancionadores derivados de 1.629 ha denunciadas, y en cuanto a 2018 la situación es de 65 expedientes con resolución sancionadora derivados de 989 ha denunciadas, los cuales se han remitido a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante CARM) a los efectos oportunos en base al artículo 8 de la Ley 1/2018 aprobada por dicha Comunidad, e igualmente se siguen remitiendo a medida que se producen. Asimismo informa que para reforzar las tareas de inspección, indica que se ha realizado un encargo a medio propio a TRAGSA por un total de 28 efectivos de los que 18 se encuentran destinados en el Mar Menor, lo que ha dado lugar a un incremento considerable en el número de expedientes sancionadores.

A continuación interviene D. Víctor Martínez, de la CARM para manifestar la queja en nombre del Gobierno de la Región de Murcia y de la Consejería de Agricultura, en relación con los 65 expedientes sancionadores a los que se ha hecho referencia, debiéndose esta queja a la forma en que han tenido conocimiento ya que ha sido a través de los medios de comunicación, y por manera en la que se ha tramitado por un doble motivo: en primer lugar por las dificultades con las que cuentan a la hora de tramitar dicha cantidad de expedientes y en segundo lugar por la alarma que se genera y la imagen que se da de que el campo de Cartagena está lleno de regadíos ilegales, teniendo en cuenta que se trata de uno de los sectores más importantes.

El Sr Martínez considera que esta forma no es la más aconsejable y lo que debe existir es una colaboración entre ambas administraciones que de momento no percibe, porque lo que a la Consejería de Agricultura le ha llegado es una mera carátula de sanción donde no se incluyen los recintos afectados por tales regadíos ilegales, no figura el número de hectáreas afectadas con la especificación de la parte correspondiente al Departamento de Condicionalidad, se desconoce la fecha del incumplimiento, siendo éste un dato imprescindible, y solo aparece la fecha de resolución. Manifiesta que esto es todavía más grave ya que en febrero y marzo de 2019, desde la Consejería se remitió a la Confederación, una solicitud por parte del citado Departamento solicitando que se les trasladara la existencia de algún impedimento en base a unos requisitos que deben incumplir a la hora de otorgar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a determinadas parcelas, a lo que Confederación contestó que no se observaba ningún tipo de ilegalidad o impedimento para otorgar dichas ayudas.

El Sr. Martínez indica que la sorpresa les llegó en octubre cuando a través de registro les enviaron las 65 carátulas de denuncia y comprueban que algunas de ellas están afectadas y son receptoras de ayuda, por lo que ha generado un problema al haber sido ya pagadas dichas ayudas y en consecuencia verse obligados a exigir el reintegro, con una posible sanción sobre el Gobierno de la Región de Murcia. Manifiesta que quieren creer que se trata de un error, aunque no entienden que en marzo de





2019 hicieran el requerimiento y que la primera sanción sea de julio de 2018. Por estos motivos solicitan mayor colaboración y que se les haga llegar a la mayor brevedad posible la información necesaria a fin de excluir a quien esté en situación irregular y no pagarle las ayudas de la PAC y para saber exactamente de qué hectáreas se trata y poder obligar en base a la Ley 1/2018, a la restauración del estado original de las parcelas.

El Sr. Presidente dice tomar nota de la queja y considera relevante que para la agilidad en el proceso exista una comunicación directa entre los técnicos que se ocupen de dichos expedientes en la Consejería y los que se ocupen de los sancionadores en la Confederación, a fin de que se establezca un documento que sea el reflejo de estas actuaciones y les sirva a ambos para realizar su trabajo adecuadamente. A este respecto indica que el Comisario de Aguas se pondrá en contacto con el Director General correspondiente para vehicular este tema, aclarando D. Javier García que en marzo se comprobaron las parcelas con el registro de aguas y que tuvo una reunión con la Directora General anterior en la que se acordó el acceso a dicho registro y enviar a la Confederación solo las que tuviera dudas, por lo que finalmente se les dio acceso a los funcionarios por ella indicados al GIS del Organismo. El Comisario de Aguas indica la posibilidad de que exista algún error ya que el registro de aguas se digitalizó en los años 90 y en la actualidad se está revisando.

Interviene D. Manuel Martínez de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, a quien le llama la atención que en relación con la concentración de boro, el Comisario de Aguas mencione que los niveles en el embalse de La Pedrera están descendiendo puesto que se vierte directamente al campo de Cartagena y no mencione que en las infraestructuras del postravase, la mayor parte del tiempo los niveles están por encima de los 0,3 mg/l establecidos el Plan Hidrológico llegando incluso a más de 0,5 mg/l. A este respecto, el Comisario de Aguas explica que en La Pedrera el valor es inferior a 0,3 mg/l, por lo que la solución es clara, y es que se puede meter todo el agua en dicho embalse y tomarla desde ahí puesto que en el canal del postravase hay grandes oscilaciones de boro. El Sr. Presidente añade que los niveles superiores a 0,5 mg/l se dan cuando nos encontramos en una situación de alerta por sequía que no se corresponde a una situación de normalidad, por lo que si esa comunidad de regantes prefiere el agua de La Pedrera, se puede interrumpir el suministro directo al canal del campo de Cartagena y suministrarla desde dicho embalse que cuenta con mejores niveles de ese elemento.

A continuación, D. Ramón Aragón del IGME formula una sugerencia en cuanto a que cuando se habla del estado de las masas de agua subterránea, la información es muy escueta ya que solo figura el número de las mismas pero no figuran los parámetros que no se superan, la norma, cuales son las masas, etc. Igualmente echa en falta los datos de la batería estratégica de sondeos (BES) de las vegas Media y Baja, y referente a este tema, el Sr. Presidente indica que desde Comisaría de Aguas se va a enviar dicha información a todos los miembros de la Junta para que les quede constancia.

El Sr. Presidente explica que los siguientes puntos que son los acuerdos a adoptar son la consecuencia de la situación de alerta en la cuenca que marcan la dotación o indisponibilidad de dotaciones de agua, y da paso al **punto siete** del orden del día **"Acuerdo a adoptar: Someter a consideración de la Junta de Gobierno la aplicación de indisponibilidad o reducción de dotaciones de acuerdo al Plan Especial de Sequía"**, cediendo la palabra nuevamente al Comisario de Aguas, quien indica que en el título de la documentación distribuida al respecto, figura añadido al anterior enunciado *"...y al Real Decreto que la regula"*, y se trata de un error, por lo que no debe tenerse en cuenta.

El Comisario de Aguas indica que a la vista del índice de escasez del sistema global que se encuentra en alerta como ya ha sido explicado por el Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, y



la evolución de las aportaciones y de desembalses en la cuenca también explicados por el Director Técnico, cabe concluir que la cantidad de agua embalsada en las presas de la cabecera de los ríos Segura y Mundo sigue siendo insuficiente para atender las demandas de los usuarios del subsistema cuenca con normalidad, ya que al inicio del año hidrológico anterior las existencias eran de 130 hm³ y al inicio del que está en curso son de 108 hm³.

Explica que en octubre se han desembalsado 23,25 hm³ y en noviembre 19,10 hm³, lo que supera los 12 hm³ previstos para cada mes como objetivo por la Comisión de Desembalse, y a pesar de no encontrarnos todavía en sequía prolongada, debemos reservar parte del agua para los riegos del verano que viene. Por tanto, en base al Plan especial ante situaciones de alerta y eventual sequía (PES) regulado por la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, y al artículo 55 del RDL 1/2001, de 20 de julio de la Ley de Aguas que faculta a los Organismos de cuenca a condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional con carácter temporal, así como a la aplicación del artículo 8.5 de las disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura, que determina que se da prioridad a los regadíos tradicionales anteriores a 1933 sobre los posteriores, se formula la siguiente propuesta en la línea de lo acordado en la anterior Junta de Gobierno:

Primero: Establecer para el año hidrológico 2019-2020 una reducción del 24% de los derechos concesionales a todos los aprovechamientos de aguas del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quípar que no tengan la consideración de regadíos tradicionales anteriores al año 1933 (aprovechamientos “no tradicionales”).

Segundo: Establecer para el año hidrológico 2019-2020 una reducción del 15% de los derechos concesionales a todos los aprovechamientos de aguas del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quípar que tengan la consideración de regadíos tradicionales anteriores al año 1933 (aprovechamientos “tradicionales”).

Tercero: Los acuerdos de los apartados primero y segundo serán, en su caso, revisables para el segundo semestre del año hidrológico en función de la situación hidrológica de la cuenca.

El Sr. Presidente abre el turno de intervenciones, cediendo la palabra a D. Isidoro Ruiz, de la Junta Central de Usuarios Norte vega Río Segura, quien considera que nos encontramos en la misma situación del año anterior y que los riegos tradicionales anteriores a 1933, en lugar de aplicarle una reducción del 15% debería ser del 10%, y en cuanto a los no tradicionales, se debería aplicar una reducción del 20% en lugar del 24%, añadiendo que la revisión debe ser en un periodo lo más breve posible sin esperar tanto tiempo, a fin de tener un control más directo. Considera que si las cosas van mal se puede incrementar la reducción más adelante ya que estamos en invierno y no es necesario causar alarma porque de hecho no se gasta toda el agua y quizá llueva más adelante. Asimismo, el Sr. Ruiz solicita que se traslade a Madrid que esta cuenca ya está tomando decisiones serias respecto a los riegos, a fin de poder solicitar adecuadamente un decreto de sequía llegado el momento.

A continuación, D. Javier López de Iberdrola Generación, S.A.U. interviene para recordar que hay usos consuntivos y no consuntivos, matizando el Sr. Presidente que la propuesta es para los riegos tradicionales y no tradicionales.

El Sr. Presidente, en referencia a la intervención del Sr. Ruiz, recuerda que es la Junta de Gobierno la que decide qué tipo de restricción somete a los distintos usuarios, considerando que no se puede añadir a los usuarios de regadíos una alarma adicional a la que ya tienen, ya que a pesar de que la cuenca ha mejorado, saben perfectamente que estamos en situación de alerta, y recuerda que aun



habiendo aplicado las últimas restricciones, no se alcanzó el objetivo previsto. Por este motivo entiende que es necesario realizar un ejercicio de precaución.

A este respecto el Sr. Ruiz insiste en que en unos meses, en caso de no alcanzar el objetivo se puede reajustar las reducciones, a lo que el Sr. Presidente indica que la obligación del Organismo es poner a disposición de los miembros de la Junta la información disponible, pero es previsible de antemano que con un recorte inferior, la situación va a ser más difícil de controlar y la pretensión es evitar llegar al verano con un escenario en el que haya que realizar no solo la regularización en las tomas sino también el precintado. Recuerda que el proponer los porcentajes del 24% y el 15% se debe a que a los usuarios que asistieron a la Comisión de Desembalse, coincidentes con los de hoy, les pareció bien. Asimismo solicita el parecer de algunos miembros de la Junta antes de someter la propuesta a una votación.

Interviene D. Julio Zapata, de la SAT Los Dones, quien coincide con el Sr. Presidente al recordar que cuando necesitan agua es en primavera y verano, e igualmente está de acuerdo con el Sr. Ruíz en cuanto a que están guardando el agua que no gastan. El Sr. Ruíz insiste en que no se debe crear más alarma entre los regantes, por lo que está de acuerdo en disminuir las restricciones propuestas y considera que sería interesante que la Consejería de Agricultura se manifestara al respecto.

El Sr. Martínez de la C.R. Campo de Cartagena, manifiesta que ha llovido en toda la región y por tanto la necesidad es muchísimo menor, pero no cree conveniente relajar las medidas y desembalsar más agua se utilice o no, porque luego en el segundo semestre del año hidrológico no hay posibilidad de corregir. Opina que es correcto mantener la restricción y posteriormente si la situación cambia se pueden reducir estas restricciones de cara a contar con el agua necesaria en primavera y verano.

Interviene D. Lucas Jiménez, del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, quien manifiesta que es momento de ser previsores para no encontrarnos de nuevo con los recortes del año anterior, pudiendo reunirse en un par de meses para revisar las medidas.

D. Sebastián Delgado de la Región de Murcia recuerda que la diferencia respecto al año anterior es de 22 hm³ de agua disponible para el subsistema cuenca al inicio del año hidrológico, y según el último parte oficial publicado esa cantidad ya se ha reportado a 7 hm³, además de que los desembalses de octubre y noviembre han sido superiores a los que se deberían haber realizado. De estos datos deduce que existe una tendencia realmente positiva en el incremento de las aportaciones en los embalses de cabecera, y aunque considera que tenemos que seguir siendo precavidos, hay que tener en cuenta que ya que se llevó a cabo un desembalse total de 300 hm³ que corresponden a la segunda fase del PES, por lo que tanto la reducción global del 18% propuesta por la Confederación, como la global del 14% propuesta por el Sr. Ruíz, entrarían dentro de los condicionantes fijados por el PES para dicha fase. Por lo expuesto, el Sr. Delgado propone realizar una primera votación con las reducciones del 20% y el 10% y en caso de que el resultado no sea favorable, votar la propuesta del Organismo del 24% y 15%.

El Sr. Presidente considera que es necesario trasladar tanto a los regantes como a la sociedad en general, que nos encontramos en una situación de alerta, y por experiencia de otras ocasiones, cuando existe un relajamiento en las medidas, aumentan los consumos. Dice estar convencido de que aun manteniendo las restricciones habrá que ir compuerta por compuerta para alcanzar el 10 o el 15%, por lo que es ahora en invierno cuando hay que seguir aplicando las mismas restricciones. Indica que lo que se estableció en la Comisión de Desembalse que fueron 300 hm³ y pese a las restricciones y a que la percepción de que la situación no era buena, se ha producido un sobreconsumo llegando a los 347 hm³, por lo que si ahora se traslada que la situación es mejor, podríamos llegar a los 380 hm³, lo que



daría lugar al precintado de las tomas. Considera por tanto que lo más conveniente es mantener la prudencia.

Al respecto, el Sr. Delgado aclara que están de acuerdo en mantener reducciones dada la situación de alerta y recuerda la solicitud efectuada de que se elaboren los informes oportunos a fin de que si se entra en situación de sequía prolongada se pueda activar un decreto de sequía de forma inmediata sin tener que esperar a los dilatados plazos que conlleva este tipo de tramitación. El Sr. Presidente apunta que en caso de entrar en sequía, le costaría mucho defender que previamente se ha abierto la mano, ya que no lo iba a entender nadie. El Sr. Delgado dice estar de acuerdo en ese extremo pero recuerda que las restricciones iniciales que se aprobaron en el año hidrológico anterior eran similares a las propuestas por el Sr. Ruíz, a lo que el Sr. Presidente contesta que entonces las existencias eran mayores. El Comisario de Aguas, dirigiéndose al Sr. Ruíz, indica que muchos de los usuarios de la Vega Alta han preguntado si se mantienen las restricciones del 24 y el 15%, dándolo por hecho.

El Sr. Ruíz muestra su pesar al decir que se está echando agua al mar y sin embargo no se puede reducir la restricción en un 5%, a lo que el Sr. Presidente recuerda que venimos de una situación compleja que ha dado lugar a un incremento de la conductividad conocida muy bien por la Vega Baja, y el que siga saliendo agua al mar se debe a que sigue habiendo escorrentías laterales que van entrando al río, y hay que tenerlo todo en cuenta.

A continuación interviene D. Pedro Mompeán, del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, que manifiesta que es una pena que en España, bien sea por los agricultores o por la Administración, se diga que estamos escasos de agua con la cantidad de agua que va al mar en todo el país, en lugar de administrarse debidamente. Considera que en estos momentos, la Vega Baja del Segura no necesita agua y se pregunta por qué no se aprovecha dejándola en el mínimo, ya que en otro momento les va a hacer falta y les ayudarán al igual que ellos han hecho, entendiendo que si en estos momentos no van todos de la mano, pocas cosas podrán conseguir. Opina que se trata de un problema político dado que nunca se ponen de acuerdo.

El Sr. Luengo de la Región de Murcia, aludiendo a la propuesta del Sr. Ruíz en cuanto a que la restricción sea menor con revisión a los dos meses, considera que sería conveniente hacerlo al contrario manteniendo la restricción propuesta por la Confederación y revisarla en ese plazo para valorar su modificación a la vista de la evolución de la situación. Asimismo apunta que coincide con el Sr. Mompeán en casi todo.

El Sr. Ruíz manifiesta no tener inconveniente en que se mantengan las mismas restricciones, pero que lamentablemente su experiencia le dice que una vez que se pongan en marcha, va a ser muy difícil volver hacia atrás, a lo que el Comisario de Aguas aclara que todo irá en función de la situación hidrológica de la cuenca.

A la vista de lo expuesto por los miembros de la Junta, el Sr. Presidente propone efectuar la revisión en el mes de febrero de 2020 con las restricciones ya indicadas anteriormente. No existiendo ninguna objeción por parte de los asistentes, se adopta el siguiente **acuerdo** por unanimidad:

Primero: Establecer para el año hidrológico 2019-2020 una reducción del 24% de los derechos concesionales a todos los aprovechamientos de aguas del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quípar que no tengan la consideración de regadíos tradicionales anteriores al año 1933 (aprovechamientos "no tradicionales").





Segundo: Establecer para el año hidrológico 2019-2020 una reducción del 15% de los derechos concesionales a todos los aprovechamientos de aguas del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quípar que tengan la consideración de regadíos tradicionales anteriores al año 1933 (aprovechamientos “tradicionales”).

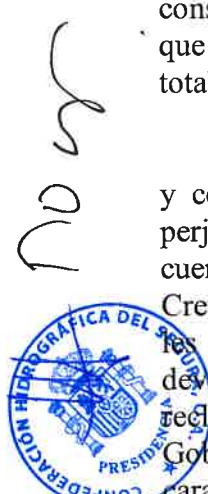
Tercero: Los acuerdos de los apartados primero y segundo serán, en su caso, revisables durante el mes de febrero de 2020.

A continuación, el Sr. Presidente da paso al **punto ocho** del orden del día “**Acuerdo a adoptar: Someter a consideración de la Junta de Gobierno no computar en los meses de octubre y noviembre de 2019 a efectos de utilización concesional, las aguas captadas por la Vega Baja con posterioridad a la DANA por su mala calidad**”, recordando que se ha enviado a los miembros de la Junta la petición efectuada por la Vega Baja en relación a este punto, así como la documentación elaborada por la Comisaría Adjunta como justificante de la propuesta. Así cede la palabra a D. Adolfo Mérida, Comisario Adjunto, quien explica que se trata de una situación excepcional ya que es poco frecuente que el embalse de Santomera esté aportando caudales al río con volúmenes tan elevados. Asimismo indica el nivel de conductividad del agua de este embalse ha llegado hasta 5.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, lo que la hace poco aprovechable.

En cuanto al ámbito temporal, el Sr. Mérida informa que la propuesta abarca desde el inicio del año hidrológico hasta el 2 de diciembre de 2019, fecha en la que finaliza el desembalse, y en cuanto a la localización informa que afecta a aquellas tomas aguas abajo de la aportación de Santomera. Con carácter general indica que toda el agua que se saca se computa como consumo aunque se solicita que si hay mucha circulación de caudales que no se compute como tal. Indica que las características del embalse del Santomera son algo particulares y que la propuesta de reducción tiene sentido porque lo que se ha estado desembalsando en dicho embalse no es por un motivo de atención de demandas sino como consecuencia de sus reglas de explotación, además de contar con una conductividad muy alta.

Por todo ello, el Sr. Mérida indica que la propuesta consiste en no computar el agua desembalsada de Santomera como consumo efectivo e informa que se ha ido comprobando en relación con el caudal circulante, qué impacto tiene el embalse en dicho caudal de manera que se pueda reducir el consumo de caudales en tomas. El Sr. Presidente aclara que se trata de no atender al 100% la petición de la Vega Baja porque hay una fracción de agua que se ha tomado en el desembalse ordinario y lo que se descuenta es la parte del embalse de Santomera que no corresponde a atención de demanda sino a una necesidad urgente del plan de emergencia de la presa, por lo que de los 12,51 hm^3 medidos como consumo en tomas, se computaría solo como efectivo 5,78 hm^3 , lo que supone del orden del 50% de lo que se ha derivado por las tomas. El Sr. Presidente apunta que esta medida no compensaría la totalidad pero sí razonablemente lo que se ha derivado del Azud de los Huertos hacia abajo.

Toma la palabra D^a Belén Castellano, de la Comunidad de Regantes El Canal, quien dice entender y compartir la petición de referencia, ya que su comunidad de regantes se ha visto igualmente perjudicada, explicando que recientemente el agua que viene por las infraestructuras del Trasvase cuenta con una conductividad que no es en absoluto la ordinaria. Como ejemplo pone el embalse de Crevillente que contiene almacenada el agua del Trasvase a 1.100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y durante la semana pasada ha estado llegando a 2.400 $\mu\text{S}/\text{cm}$, lo que ha dado lugar que los propios agricultores la estén devolviendo dejando de regar al tener en cuenta su precio. Indica que han presentado un escrito de reclamación a la Confederación en este sentido que hubiera sido deseable tratarlo en esta Junta de Gobierno y que al parecer no ha llegado a tiempo, motivado porque el agua suministrada no reúne las características necesarias para el riego, por lo que solicita que atiendan dicho escrito, a lo que el Sr.





Presidente contesta que dado que dicha petición es extemporánea para esta Junta, se tratará en la próxima una vez valorada la propuesta.

Asimismo, la Sra. Castellano, en relación con la tarifa del Trasvase manifiesta que, dado que el suministro de agua ha estado interrumpido durante el tiempo que la infraestructura ha estado en reparación por rotura como consecuencia de la DANA, como usuarios, consideran discriminatorio que no habiendo podido utilizar el Trasvase, tengan que pagar la tarifa igual que los usuarios que sí la han podido utilizar, por lo que ruega que se valore efectuar la exención en cuanto a la parte A y B de la tarifa por el tiempo que no ha estado disponible dicha infraestructura. A este respecto, el Sr. Presidente considera que dicha propuesta afecta al régimen económico-financiero del Trasvase, y lo que el Organismo puede hacer es efectuar un análisis del coste y elevarlo a la Comisión Central de Explotación que es la que regula estos aspectos y puede tomar las medidas que estimen oportunas, pero indica que esta petición seguirá el curso que corresponde, no siendo éste el de esta Junta de Gobierno.

El Sr. Presidente indica que a la vista de lo expuesto, existe conformidad en la propuesta del Organismo como respuesta a la petición de los usuarios de la Vega Baja en cuanto a la derivación de agua desde el Azud de los Huertos hacia Guardamar del Segura. Consultados a los asistentes, se aprueba el **acuerdo** por unanimidad con el siguiente texto:

Considerar no computable a efectos de consumo en toma, el agua desembalsada desde el embalse de Santomera, hasta el 2 de diciembre, y en el ámbito de las tomas ubicadas desde el Azud de los Huertos hasta desembocadura incluida la toma del Azud los Huertos.

A efectos de cómputo en toma, este acuerdo se traduce en una reducción del volumen registrado en toma equivalente al porcentaje estimado de volumen de caudal procedente de agua de Santomera dentro del caudal total circulante. Esta estimación se realiza a escala diaria y en la sección de río, aguas arriba del Azud de los Huertos, corrigiendo el caudal derivado en las tomas afectadas cada día.

Seguidamente el Sr. Presidente da paso al **punto nueve** del orden del día “**Aprobación de la tarifa de utilización de instalaciones vinculadas a la Rambla del Albuñón**”, explicando que esta instalación ha sido objeto de diversas actuaciones de reparación y se encuentra en condiciones de funcionamiento, pero para ello y para atender el doble objetivo de bajar el nivel del acuífero e incorporar esas aguas al canal del postravase, la única salida es que la C.R. del Campo de Cartagena la mezcle pasando a ser ellos mismos usuarios, ya que a día de hoy no existe otra alternativa. Por tanto, la C.R. necesita dos requisitos: la autorización de uso privativo y la correspondiente tarifa de utilización del agua.

Interviene el Sr. Martínez de la C.R. del Campo de Cartagena, quien manifiesta no estar en situación de darle el visto bueno a la propuesta al surgirle ciertas dudas. En primer lugar desconoce si es preceptivo que la tarifa se apruebe en Junta de Gobierno o por el contrario debe hacerlo directamente la Presidencia del Organismo. Otra duda es si en el importe del apartado A de las obras, que fueron realizadas por la Dirección General de Obras Hidráulicas y que siempre han sido mantenidas por su comunidad de regantes, está incluido el salmueroducto. Asimismo señala que la tarifa que se les pretende aplicar excede en mucho al costo de la explotación de dicha instalación, que como orientación indica que en 2018 y hasta junio de 2019 fue de 13 cént./m³, siendo el coste a aplicar de 18,18 € que corresponde al bombeo más la conducción del postravase o de peaje, debiendo añadir el dicho importe el coste de la energía que es de 7,85 cént, ascendiendo así a un total de más de 26 cént, lo que considera una verdadera barbaridad.



Por otro lado, el Sr. Martínez quiere hacer constar que en la cuenca del Segura, hablar de captar un agua para meterla en otro lugar no procede dada la situación de escasez, y considera que dicha extracción no se realiza con un fin agrícola al tener 8.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ de conductividad. Por este motivo cree que esta propuesta debe hacerse sí o sí por un bien general y medioambiental del Mar Menor, pero no ve adecuado que el coste solo deba ser pagado por los regantes teniendo en cuenta además que el agua está en malas condiciones. Explica que la estación desalobradoradora que forma parte de estas instalaciones y que es propiedad del Ministerio, por el momento no cuenta con el tratamiento adecuado para verter al Mediterráneo a través de uno de los emisarios existentes, y por ello propone que mientras no funcione dicha desalobradoradora, de forma provisional y hasta que se ejecuten las obras correspondientes, se permita el vertido aunque se tenga que utilizar el emisario de la MCT como así estaba previsto en el proyecto de construcción de las plantas San Pedro I y II, contando con que el caudal de rechazo de las desalobradoradoras es aproximadamente de 250 m^3/h , que contrastado con los 6.000 m^3/h que se vierten por dicho emisario, el nivel de nitratos se diluiría totalmente, siendo irrelevante el contenido en el punto de vertido.

El Sr. Martínez considera así que es una forma de velar por el buen estado del Mar Menor pudiendo a la vez utilizar ese agua, por lo que indica, una vez consensuado con su Junta de Gobierno, que estarían dispuestos a abonar el coste de la energía para el bombeo y solicita no abonar el resto de gastos incluidos en la tarifa mientras el agua no tenga los requerimientos adecuados.

A continuación, el Sr. Luengo manifiesta que es importante que tengamos la seguridad de que la Junta de Gobierno es el órgano competente para aprobar la tarifa de utilización propuesta, ya que el artículo 309 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico puede dar lugar a interpretación, dando lectura a parte del mismo: *"Para las obras hidráulicas explotadas por el Organismo de cuenca éste determinará las tarifas de utilización del agua correspondientes a cada ejercicio, efectuando la liquidación conforme a lo indicado en el artículo 311."*

El Organismo de cuenca fijará las tarifas para cada obra hidráulica a su cargo correspondientes a cada ejercicio, que deberán ir acompañadas del correspondiente estudio económico efectuado con participación de los órganos representativos de los usuarios o beneficiarios existentes en el Organismo gestor correspondiente...". El Sr. Luengo, leído este párrafo, no considera a la Junta de Gobierno como órgano propio en representación de los usuarios, por lo que para evitar posibles reclamaciones, solicita un pronunciamiento al respecto.

El Sr. Presidente explica que se trata del mismo caso planteado en la tramitación de los cánones de regulación, ya que tradicionalmente lo que se hace por parte del Organismo es enviar la documentación económica previamente a la toma de decisión, entendiéndose que el procedimiento de participación del usuario queda cumplido con la recepción de dicha memoria económica que es el cuerpo de la tarifa, lo cual se perfecciona enviándolo con la suficiente antelación e indicando explícitamente en la remisión que se está dando cumplimiento al artículo correspondiente del Reglamento.

Se inicia un debate sobre el procedimiento.

Toma la palabra D. José Vicente Benadero, de la Generalitat Valenciana, quien en relación con el posible vertido por el emisario al mar propuesto por el Sr. Martínez, solicita que no se lleve a cabo ninguna actuación sin la correspondiente autorización de vertidos que cuente con el preceptivo informe de la Dirección General del Agua de Valencia, en alusión a la influencia entre masas de agua, y pone como ejemplo una de las dos masas en mal estado existentes en el Júcar como consecuencia de





otra en mal estado del Segura, por lo que en caso de producirse en la costa aunque sea cerca del límite, con seguridad tendría influencia en su masa costera.

El Sr. Luengo manifiesta que su Consejería estima de extrema urgencia que deje de circular agua por la rambla del Albujón hacia el Mar Menor al ser este el motivo por que se desestabiliza el ecosistema de este mar, dado que se vierte de forma directa y diaria un importante caudal con una concentración de nitratos y nutrientes muy elevada que llega a los 3.000 k/día. Considera que cada día que pasa no estamos contribuyendo a eliminar esa afección, por lo que se hace urgente que se realicen las actuaciones necesarias para evitar la entrada de ese agua al Mar Menor, e indica que la mejor opción es la citada elevación del agua de la rambla del Albujón, explicando que se trata de una infraestructura construida hace más de 20 años que va unida a un sistema de elevación que a través de una conducción, llega a una desalobrador construida en El Mojón, a la cual se obligó a cesar su actividad debido a que no dispone del emisario correspondiente.

A este respecto el Sr. Luengo apunta varias opciones, siendo la primera de ellas que el Ministerio ponga en marcha la citada elevación y desalar el agua para poder ser utilizada por los regantes o que no se desale y pueda ser vertida a través del emisario de la MCT tal y como ha dicho el Sr. Martínez de la C.R. del Campo de Cartagena y apunta otras opciones como la de que los regantes se hagan cargo de elevar el agua y de su desalobración en El Mojón sin tener claro qué hacer con el rechazo que se produzca, si bien podría utilizarse el emisario de la MCT. Otra posibilidad es que no se ponga en marcha la planta desaladora y que el agua sea elevada por los regantes y mezclada con el agua del canal del trasvase Tajo-Segura como se viene haciendo desde hace muchos años. Otra opción que indica es meter en juego a la estación depuradora de aguas residuales de San Pedro del Pinatar, la cual solo tendría que modificar los estatutos de ESAMUR (la entidad explotadora) para poder llevar al cabo el tratamiento de ese agua, explicando que ese emisario tiene una longitud muy pequeña frente al de la MCT y lo que es mejor, no está evacuando nada al Mediterráneo ya que todo el agua está siendo utilizada por los regantes del campo de Cartagena.

El Sr. Luengo insiste en que se trata de una decisión urgente y a pesar de que en este momento no cuentan con capacidad técnica para decir si el importe de esa tarifa es adecuado, pone como alternativa que el Ministerio conduzca ese agua al Mediterráneo a través del emisario de la MCT, con lo que con toda probabilidad se aduciría la imposibilidad física de llevarlo a cabo y se necesitaría una evaluación de impacto ambiental. Sobre este extremo, D. Carlos Conradi de la MCT responde que desde el punto de vista operacional la planta está funcionando al límite de su capacidad, recordando que ese emisario se construyó para una planta desaladora pero que, pensando que en un futuro se podría desarrollar la ampliación, aunque como dice, está al máximo de su capacidad operacional.

El Sr. Luengo manifiesta que se le va a tener que dar la razón al Sr. Mompeán dada la muestra de la inoperancia entre administraciones por no encontrar una solución, a lo que el Sr. Conradi recuerda que el emisario se construyó exclusivamente para el tema de la potabilización del agua. A este respecto, al Sr. Luengo le resulta curioso que se construyera una planta desalobrador sin emisario o punto de vertido, no obstante cree que lo más importante es avanzar hacia delante, y por este motivo consideran de imperiosa necesidad que se pongan en marcha dichas instalaciones, a ser posible hoy mismo. Asimismo entiende que no sea un tema económico el que limite estas actuaciones e insiste en encontrar una solución entre todos para que cese la aportación del agua al Mar Menor.

El Sr. Presidente apunta que lo más rápido es seguir con el procedimiento anterior y elaborar un protocolo para la encomienda de las instalaciones en el que todos los gastos sean asumidos, extremo contemplado en el conjunto con anterioridad, pero al crearse la desalobrador y no poderse utilizar ya no tiene validez, por tanto estaría sujeto a autorización administrativa. Informa que esta vía de la



encomienda de la explotación total de las instalaciones ya ha sido ofrecida a la comunidad de regantes y no han considerado oportuno aceptarla, lo que obliga al Organismo a contratar un personal que no tiene y cuyo gasto debe repercutirse en la tarifa, como es el caso del personal de la empresa TRAGSA destinado a realizar las tareas, además de una previsión de reparaciones de roturas, así como la amortización de las obras de todo el conjunto, el cual se ha visto bastante beneficiado desde el punto de vista de su reducción ya que no se está amortizando el 100% de las obras sino el 30%.

Por los motivos expuestos, el Sr. Presidente indica que está obligado por ley a generar una tarifa, la cual podría ser revisada, aunque ya se ha hecho el mayor esfuerzo por parte del Organismo para que sea lo menor posible a la vista de las circunstancias. Aclara que cualquier otro de los planteamientos efectuados por el Sr. Luengo se traduce en tiempo independientemente de la viabilidad física y del posible informe negativo de la MCT, además del informe que se tendría que solicitar a la Generalitat Valenciana.

El Sr. Benadero solicita aclaración sobre este tema, ya que se está discutiendo una tarifa que se aplicaría a unas instalaciones y un planteamiento que desconoce, a lo que el Sr. Presidente le responde que en realidad se ha comenzado un debate previo a lo que es la descripción de la tarifa y que se va a explicar a continuación.

Interviene la Sra. Baraza por alusiones, manifestando la sorpresa de que la solución del Mar Menor pase por el emisario de la MCT y puntualiza al Sr. Luengo que la aportación directa de nitratos que permanentemente recibe dicho mar no es algo actual, ya que en 2016 dio el primer síntoma de eutrofización al llevar muchos años aportándole una carga importante de nutrientes, por lo que el punto que se ha alcanzado nos obliga a todos a tomar soluciones. Explica que para ello es necesario pensar no solo en las infraestructuras disponibles o en las que se necesiten, sino en su conjunto, porque una tubería no va a evitar que dichos nutrientes sigan entrando al mar, solo lo minimizaría, por ello considera que el Mar Menor necesita una apuesta más profunda y con un mayor nivel de reflexión.

Por tanto, la Sr. Baraza cree que ha quedado claro, que la solución del emisario de la MCT no es viable ni técnica ni ambientalmente, ya que los emisarios dan respuesta a una infraestructura determinada, que en este caso es la desaladora del Taibilla, que cuenta con unas condiciones ambientales de vertido predeterminadas que son las que cumple y no se pueden alterar, recordando que el Sr. Luengo es conocedor de este extremo ya que se dijo en el Ministerio hace unos meses. Continúa explicando que además esta solución supondría un nuevo proceso y análisis de situación que no iría en la línea de las medidas de urgencia indicadas y le sorprende que de todas las medidas apuntadas por el Sr. Luengo, no contemple la reflexión sobre el sistema de explotación del campo de Cartagena cuya competencia corresponde a su consejería. Insiste en que el Mar Menor necesita de todos los presentes y de otros sectores, un estudio más profundo sobre las alternativas con propuestas mucho más integradas donde las actuaciones concretas de determinados usos intensivos que se llevan a cabo en relación con la cuenca vertiente, que no es solo la agricultura, sean analizadas.

El Sr. Luengo aclara al respecto que en ningún momento ha dicho que sea la única solución, sino que lo que ha indicado es que una de las alternativas contempla infraestructuras ya ejecutadas como es la puesta en marcha de la elevación de la rambla del Albujón. D. Víctor Martínez añade que el resto de medidas sobre el Mar Menor se tratarán en el foro que corresponda, pero que dicha posibilidad se plantea en esta Junta al ser la competente en esta materia, a lo que la Sra. Baraza indica que dado que el agua que va cargada de nitratos por derivar de una actividad concreta, también debería ser objeto de interés.



A continuación el Sr. Presidente da la palabra nuevamente a D. Manuel Martínez quien lamenta enormemente que se haya suscitado un debate político al no considerarlo objeto de esta Junta. Dirigiéndose al Sr. Luengo aclara que en su zona, captar un agua para derivarla por un emisario cuando técnicamente se puede desalobrar y reutilizar, no es de recibo, por lo que no la considera como una opción válida, y en cuanto al resto de opciones opina que pueden ser analizadas. En cuanto al tema del emisario, y en alusión a la Sra. Baraza y al Sr. Benadero, indica tener claro que no se trata de una solución definitiva, recordando que al exponerla ya ha apuntado que es una medida provisional mientras no se cuente con una solución más adecuada e indica que dispone de informes técnicos de los que se desprende que el emisario tiene capacidad suficiente, aunque desconoce si la planta funciona a pleno rendimiento todo el año. Recuerda que estamos hablando de un rechazo de entre 200 y 250 m³/h, lo que supone una ridiculez en relación con su capacidad, e igualmente recuerda que en el B.O.E. de 2006 figura conjuntamente el vertido San Pedro I y II y la desalobrador, proyecto que se habilitó por el Ministerio sin llegar a ejecutarse, insistiendo en que se trata de una medida provisional aunque eficaz y rápida de cara a contribuir al buen estado del Mar Menor.

El Sr. Presidente indica que no existe inconveniente en que los asistentes a esta Junta puedan hacer declaraciones políticas de uno u otro signo, ya que nos encontramos en una sociedad democrática racional y tranquila, máxime si detrás de las soluciones hay decisiones políticas. Asimismo manifiesta que se está trasladando la sensación a la sociedad de que esa opción contribuye en gran medida a la solución del Mar Menor cuando en realidad no es así, recordando que en un año de explotación por roturas, la comunidad de regantes obtuvo 1,6 hm³ como así consta en el Organismo, pudiendo llegar como mucho hasta algo más de 2 hm³, cuando los estudios disponibles muestran que la horquilla de lo que está drenando al Mar Menor es muy superior. Al respecto indica que la cifra podrá precisarse cuando la determine la Oficina de Planificación Hidrológica conjuntamente con el IGME. No obstante, y a pesar de que esta solución cuenta con una serie de limitaciones importantes, el Sr. Presidente manifiesta que si estuviera en su mano la pondría en marcha, pero han ido apareciendo obstáculos administrativos, y recuerda que la solución más rápida es lo que se venía haciendo, que al parecer ya no conviene, siendo la opción, la propuesta en este punto, aunque en ello interviene que la tarifa se acepte o no por la Junta de Gobierno de dicha comunidad de regantes, lo que da lugar a que pase un tiempo con el que no contamos, e insiste en que el Organismo no puede actuar de otra manera.

D. Manuel Martínez recuerda que en el año 2000 pusieron en marcha las instalaciones necesarias, sin que hasta la fecha haya ido ni el Ministerio ni nadie a visitarlas, considerando que el no ver aconsejable explotar en este momento dichas instalaciones es por el mismo motivo por el que en junio se decidió parar la instalación y entregar la llave procediendo a la no novación de la concesión, y unos meses después se les pide que tienen que volver a solicitar la concesión. Indica que si en algún momento se les encomienda la gestión de esas instalaciones con todas las autorizaciones, los puntos de aliviadero y un protocolo de actuación en caso de rotura de tuberías, y se produjera un problema en la explotación, habida cuenta de las numerosas incidencias por avería debido a una partida defectuosa y por tener en ocasiones que desaguar la tubería en parcelas de otros propietarios teniendo en cuenta la alta conductividad del agua, su comunidad de regantes no está dispuesta a asumir una responsabilidad por posible delito ambiental. A este respecto, el Sr. Presidente le recuerda las conversaciones mantenidas en las que jamás aconseja a nadie realizar actuaciones que puedan derivar en la Fiscalía.

Interviene el Sr. Mompeán, que como regante agradece la ayuda del Trasvase, ya que sin él la Vega Baja sería una ruina desde hace 20 años, pero no obstante y en relación con el precio de la tarifa, considera que no siempre hay que ver si algo es caro o no si es la solución, sino que cuando se cuenta con un servicio, es necesario pagarlo, poniendo como símil el hacerse cargo del coste de la reparación por rotura de un camino de servicio.





Toma la palabra el Sr. Jiménez del SCRATS, quien dice ponerse en el lugar de la C.R. del Campo de Cartagena y entiende que no quieren hacerse cargo llegadas las circunstancias. Suscribe la propuesta de dicha comunidad de regantes y valora su importante esfuerzo al asumir un agua con una dudosísima calidad, y por ello pregunta si la propuesta de dicha comunidad sobre que haya una consideración en cuanto al precio de la tarifa teniendo en cuenta la mala calidad del agua, se puede atender por esta Junta de Gobierno. El Sr. Presidente responde que la aprobación de la tarifa está condicionada a esta Junta de Gobierno, por lo que quizá sería conveniente esperar al pronunciamiento de la Junta de Gobierno de la C.R. del Campo de Cartagena, de lo contrario no tendría sentido este debate.

El Sr. Martínez entiende que si finalmente se aprueba la tarifa, siempre les queda el derecho a recurrirla, ya que el sistema empleado anteriormente les costaba la mitad, e insiste en que su propuesta se hace en base a contribuir en la medida de lo posible a no seguir perjudicando al Mar Menor además de no seguir demonizando a la agricultura. Asimismo muestra su disposición a colaborar, pero entiende que si valoran los puestos de energía, lógicamente, la tarifa, o no ha lugar aplicarla o la indicaría el Organismo porque el resto ya lo pagan ellos. Igualmente le surge la duda sobre si en el caso de hacer la encomienda a la empresa TRAGSA, es esta o el Organismo quien es responsable si se para la instalación y se produjera un vertido por el aliviadero, a lo que el Sr. Presidente responde que en primera instancia sería la empresa y subsidiariamente el Ministerio, aclarando que se trataría también de una encomienda a un tercero, por lo que si el condicionado se cumple, la responsabilidad es del Organismo y en caso contrario de quien lo ha incumplido.

A continuación el Sr. Presidente indica que se va a explicar la tarifa para que la Junta decida si es onerosa o no, para lo que toma la palabra el Director Técnico, quien expone que en 1999 la Confederación realizó unas obras consistentes en una red de drenajes que van a tres elevaciones que terminan en San Pedro del Pinatar donde se construyó una desaladora para llevar el agua a partir de otro bombeo al canal del campo de Cartagena y poder ser utilizada por un concesionario, que en ese momento era la C.R. del Campo de Cartagena. Durante su funcionamiento se va detectando que la tubería tiene una serie de paradas y vertidos cuando esa red de drenaje no puede llegar a la desaladora y por otro lado tampoco se puede utilizar la desalobradoradora en un momento dado porque no tiene vertido al mar. Explica que dicha comunidad de regantes siguió bombeando agua consiguiendo así una mezcla en el propio canal con el agua de las desaladoras de Torre Vieja y que el problema viene cuando han tenido que dejar de explotar dichas instalaciones al producirse fallos, con lo que ese agua entra en el Mar Menor pasando a considerarse como vertido por la Consejería de Agua y Agricultura.

El Sr. Marco indica que en este transcurso acaba la concesión a la C.R. del Campo de Cartagena, quien vuelve a solicitarlo pero con condiciones distintas, ya que el agua pasa por una desaladora e incluso por una desnitrificadora. La petición es de 6 de noviembre de 2019 con un escrito complementario que presentan el 21 del mismo mes en los que solicitan volver a ser concesionarios de esas aguas, cuyo expediente está tramitando la Comisaría de Aguas, pero con dichas aguas en el mismo estado, es decir, si no se puede utilizar la desalobradoradora, quieren hacer la mezcla con las aguas de la desaladora de Torre Vieja, aunque no incluyen en dicha petición el hacerse cargo del mantenimiento de la explotación, lo que implicaría que fuera el Organismo quien se hiciera cargo. Como consecuencia de ello se hace una valoración para determinar cuál es el precio de ese trabajo realizado anteriormente por dicha comunidad de regantes, al mismo tiempo que se elabora una tarifa para repercutir los gastos que asumiría la Confederación en el agua que ellos van a utilizar.

Continúa explicando que dicha tarifa está compuesta por tres elementos: la parte A relativa a los costes directos, como es la encomienda de explotación a TRAGSA que es quien pondría el personal y



asumiría el mantenimiento, así como una partida de 38.834 € correspondientes a una serie de obras efectuadas derivadas de la afección por la DANA. La parte B relativa a los costes indirectos que provienen del 24% correspondientes al Área de Gestión del Trasvase calculados sobre el 35% de los gastos generales del Organismo que corresponden a la Dirección Técnica, también incluyen el 24% de los gastos generales de la Dirección Técnica que se imputan de igual manera a la parte correspondiente al Área de Gestión del Trasvase y los gastos relativos al capítulo I de la explotación del Postrasvase. A la suma total se le aplica un coeficiente teniendo en cuenta el volumen por concesión que se compara con todo el volumen de las aguas que explota el Área de Gestión del Trasvase, lo que da como resultado un 1,06% que asciende a 19.721,82 €. Por último, la parte C corresponde a los gastos de amortización que incluyen las obras y el pliego de bases del proyecto, así como las obras de acondicionamiento de un paso por debajo de la autovía AP-7 acometidas como consecuencia de una rotura, que ha financiado directamente la Confederación y no la comunidad de regantes y que ascienden a algo más de 170.000 €. Con lo que todos los gastos se someten a una tabla de amortización a 25 años, procurándose que el importe a incluir sea el mínimo al estar cofinanciado con fondos FEDER. La suma de los tres componentes asciende a 464.000 €, cantidad ésta a pagar en concepto de tarifa.

El Director Técnico explica que si se tratara de una concesión normal, se dividiría el importe por el volumen y se obtendría la tarifa por m^3 , pero se ha considerado que se van a producir una serie de paradas técnicas por lo ya expuesto y que supondría que el 20% del tiempo no se va a poder dar suministro, con lo que se reduce en la tarifa, y por otro lado, la C.R. del campo de Cartagena cuenta con otra concesión que es la de la EDAR de San Pedro del Pinatar, siendo este el motivo de que la tarifa se divida en dos: una de 0,16464 €/m³ a la que se ha llamado tarifa "D" en caso de que se esté utilizando la rambla del Albuñón, y otra tarifa "E" en caso de que se esté utilizando dicha EDAR que es de 0,04088 €/m³. Aclara que este sería el coste de la Confederación para poder aprovechar esas aguas, y teniendo en cuenta que se pondría directamente en el canal realizando la mezcla con la desaladora de Torrevieja, habría que incrementar el importe de la tarifa de peaje.

El Sr. Benadero solicita aclaración a efectos de la Comunidad Valenciana sobre si va a haber algún tipo de vertidos que les pueda afectar, a lo que el Director Técnico indica que si no existiera la instalación serían aguas de drenaje y no tendrían consideración de vertido y que ese es el problema. El Sr. Benadero espera que para no dañar más al Mar Menor, esas aguas no se viertan a otra zona que se considere más sana y que les pueda afectar. El Sr. Luengo apunta que cualquier vertido que se produjera tendría que estar sometido a la Directiva Marco del Agua. El Sr. Presidente añade que lo complicado de la situación es que por interceptar un agua que está saliendo para evitar su salida al mar, si la instalación falla, se considera vertido.

D. Manuel Martínez entiende que no se trata de un vertido sino de un agua que de modo natural desemboca ahí que es el nivel freático. A la sugerencia del Sr. Luengo sobre que la Sra. Baraza puede explicarlo, esta indica que la competencia sobre los vertidos está clara ya que es la Consejería quien debe autorizarlos. El Sr. Luengo apunta que existen dos opciones, la primera que ese aliviadero no desemboque en el Mar Menor ya que de acuerdo con la ley aprobada por la Asamblea Regional, todo tipo de agua que desemboque a través de una conducción en el Mar Menor, se considera vertido, estando prohibido cualquier tipo de vertidos, por lo que se podría instalar un codo de 45° y derivarlo a una rambla. La segunda opción es modificar la ley que es en lo que ya están trabajando.

El Sr. Martínez indica que el procedimiento del cálculo de la tarifa puede ser el correcto, pero solicita aclaración sobre si en el coste de las obras está contemplado el del salmueroducto, a lo que el Director Técnico contesta que no debería estar. El Sr. Martínez añade que el coste de todo eso era de 13 cent/m³ y el coste de lo que se plantea ahora es de casi 26 cent/m³, lo que considera excesivo. A





este respecto el Sr. Marco indica que hay dos aspectos de la tarifa que la encarecen: uno, que el utilizar una encomienda de gestión resulta muy caro, y otro es la amortización que hasta ahora no se estaba repercutiendo. El Sr. Martínez responde que su comunidad de regantes también podrían descontar todas las inversiones efectuadas y que están en proceso de amortización, a lo que el Sr. Marco puntualiza que la amortización reflejada en la tarifa solo contempla los últimos 5 años y que el resto no han tenido que pagarla.

El Sr. Presidente considera que la aplicación de la tarifa debe hacerse de acuerdo al trámite reglado, lo que comportaría aprobar la tramitación de la propuesta por la Junta si la considera oportuna, someterlo a información pública, plazo en el que puede alegar el interesado y por último resolver por parte de la Presidencia, que en el caso de que se declarara de urgencia, se podría reducir el plazo a la mitad, y aun así nos iríamos al mes de enero, insistiendo en que no contamos con otro procedimiento.

El Sr. Martínez opina que la conclusión que se va a sacar es que no se puede arrancar la instalación y se sigue vertiendo agua al Mar Menor porque los regantes se niegan a pagar la tarifa, y es algo con lo que no está de acuerdo. A este respecto, el Sr. Presidente aclara que no es así y que lo que corresponde es seguir con la tramitación de la tarifa, encontrándonos en este momento en el primer paso para ello.

Seguidamente el Sr. Presidente somete a votación la aprobación de la tramitación de la propuesta de la tarifa de utilización de instalaciones vinculadas a la rambla del Albujón, siendo **aprobada** por mayoría con el voto en contra de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

A continuación, en el **punto diez** del orden del día “**Ruegos y preguntas**”, interviene D. Lucas Jiménez para manifestar en esta Junta, su pesar por la lamentable decisión política que tomó el Ministerio el pasado mes de noviembre aprobando un trasvase 0 basado en datos inciertos como por ejemplo que a 1 de diciembre nos íbamos a encontrar por debajo de 400 hm³, cuando la realidad es que estaba en 442 hm³, lo que lleva a pensar al SCRATS que se ha tratado de una mera decisión política.

El Sr. Luengo coincide con la exposición realizada por el Sr. Jiménez y comunica que varias comunidades de regantes, debido a los daños sufridos en ciertas infraestructuras por el episodio de la DANA y no poder consumir agua correspondiente al año hidrológico que ha acabado el 30 de septiembre, les han solicitado que el consumo correspondiente a ese periodo pueda ser prorrateado y computado durante el siguiente año hidrológico, solicitando que se valore por parte del Organismo, a lo que el Sr. Presidente indica que es necesario conocer de qué comunidades de regantes se trata, por lo que pueden ponerse en contacto directamente con el Organismo o a través de la Consejería.

D. Manuel Martínez ruega que conste en acta que por parte del Ministerio no se está aplicando los 30 cent en el agua desalada para riego desde hace 2 años.

Sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente da las gracias a los asistentes emplazando a los miembros de la Junta para el próximo mes de febrero y levanta la sesión a las quince horas treinta minutos.

A continuación, se reproduce el contenido del escrito presentado con fecha 20 de diciembre de 2019 por el Subdirector General de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas de la Dirección General del Agua de la Generalitat Valenciana, con la aclaración del voto de esa comunidad autónoma en relación con el punto 9 del Orden del Día:



“ASUNTO: Aclaración de voto del representante de la Generalitat Valenciana en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura celebrada el 12 de diciembre de 2020.

A la mencionada Junta asistió por parte de la Generalidad Valenciana el subdirector general de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, José Vicente Benadero García-Morato, por delegación de la Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y del Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

Conforme al punto 9 del Orden del día, se sometió a votación el acuerdo de aprobación de la tarifa de utilización de instalaciones vinculadas a la Rambla del Albujón.

Antes de emitir este voto, el citado funcionario de la Generalidad solicitó aclaración sobre el funcionamiento de las instalaciones cuya tarifa pretendía aprobarse, por si su puesta en marcha pudiera suponer un vertido que afectase al dominio público marítimo terrestre recordando que, de ser así, debería obtenerse previamente la autorización de vertido y que en dicho trámite tendría que solicitarse, necesariamente, informe a la Generalitat Valenciana ya que, por ser límite, podría afectarse negativamente al litoral del sur de Alicante.

Como respuesta a esa solicitud de aclaración, el director técnico de la Confederación explicó que la actuación consistirá en un bombeo de aguas subterráneas que se entregarían, sin pasar por un tratamiento de desalobración, a los regantes del Campo de Cartagena para su uso una vez mezcladas con aguas propias (entendiéndose que del trasvase), a fin de diluir su elevada conductividad. Con ello se evitaría la surgencia directa al Mar Menor de las aguas extraídas del acuífero.

Habida cuenta esta aclaración, los dos votos del representante de la Generalidad Valenciana fueron favorables (en la medida en que no cabe la abstención por parte de los representantes de las administraciones públicas en órganos colegiados) a la tarifa propuesta por la Confederación, dado que, aparentemente, la tarifa está bien calculada, conforme a la exposición realizada por el director técnico.

El presente escrito tiene por objeto dejar constancia de nuevo, pero por escrito (pues verbalmente ya se dijo en la reunión), de que ese voto favorable lo es únicamente a efectos de la propuesta de tarifa, que es lo que consta en el orden del día, y que en ningún caso, supone una postura favorable al uso de instalaciones sin todos los permisos oportunos, como pueden ser la concesión de las aguas utilizadas o la autorización de vertido, si este llegara a producirse. Tampoco supone este voto favorable opinión alguna sobre la idoneidad o eficacia de la medida propuesta, puesto que no se dispone de la información necesaria para evaluarla adecuadamente.

Para que así conste y se incluya en el acta correspondiente,”

DILIGENCIA:

Para hacer constar que la presente acta ha sido aprobada en la sesión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. celebrada el día 26 de febrero de 2020.



17071.

